



MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO (MAIN) DEL PROYECTO DE ORDEN DE LA CONSEJERA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL, POR LA QUE SE PRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS INDIVIDUALES A PERSONAS TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EXCEDENCIA LABORAL O REDUCCIÓN DE JORNADA DE TRABAJO PARA EL CUIDADO DE HIJOS O DE HIJAS O FAMILIARES.

JUSTIFICACIÓN DE LA MAIN ABREVIADA

Esta memoria se ha elaborado en atención a lo previsto en el artículo 53.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, que requiere la elaboración de una memoria de análisis de impacto normativo, como documento que acompañará a todo anteproyecto de disposición de carácter general realizado por el órgano directivo.

Se ha optado por elaborar el modelo abreviado previsto en el apartado C (contenidos de la MAIN abreviada) de la Resolución de 13 de febrero, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 6 de febrero de 2015, por el que se aprueba la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, teniendo en cuenta que no se prevén impactos significativos derivados de la aplicación de la Orden propuesta.

A) FICHA RESUMEN.

1.- Órgano impulsor: Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción Social.

2.- Consejería proponente: Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.

3.- Título de la norma: Orden de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política social, por la que se prueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas individuales a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas o familiares.

4.- Fecha: Fecha determinada por firma electrónica al margen.

5.- Oportunidad y motivación técnica: la pertinencia de estas normas reguladoras viene dada por la necesidad de establecer el régimen jurídico aplicable a las ayudas individuales a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas o familiares.

Situación que se regula: establecer las normas reguladoras para la concesión de las ayudas individuales a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas o familiares.

Finalidad del proyecto: esta Orden de normas reguladoras se encuadra dentro de la actividad de fomento de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social con la propósito último de, dando cumplimiento a lo acordado en el Pacto del Diálogo Social para la reactivación económica y social de la Región de Murcia, suscrito el 16 de mayo de 2020, ofrecer ayudas económicas para compensar la reducción de retribuciones que sufren aquellas personas trabajadoras por cuenta ajena





que se han visto obligadas ante la crisis sanitaria generada por el COVID-19 a solicitar una excedencia laboral o reducción de jornada para el cuidado de hijos o hijas o de un familiar.

Novedades introducidas: Se trata de una regulación “ex novo” por parte de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, por lo que su contenido en su integridad constituye una novedad, con la previsión de convocatoria de estas subvenciones en el presente ejercicio presupuestario.

6.- Motivación y análisis jurídico: El objetivo de esta norma es establecer el régimen jurídico básico para la concesión de las ayudas individuales a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas o familiares, que se van a convocar este año en la Región de Murcia por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

Tipo de norma: Orden dictada por la Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.

Competencia de la Comunidad Autónoma: la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ostenta la competencia exclusiva en materia de asistencia y bienestar social, en virtud de lo establecido en el apartado dos, letra e) del artículo 10.1.18 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Estructura y contenido de la norma: se estructura en 18 artículos y dos Disposiciones Finales, y recoge las normas reguladoras para la concesión de las ayudas individuales a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas o familiares.

Normas cuya vigencia resulte afectadas: Ninguna

Trámite de audiencia: No se somete a trámite de audiencia

Informes a recabar:

- Informe del Consejo Asesor Regional de Personas Mayores, de Personas con Discapacidad y de Infancia y Familia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 95/2004, de 24 de septiembre, por el que se crean y regulan los consejos asesores regionales de carácter sectorial de servicios sociales.
- Informe preceptivo del Consejo Asesor Regional de Servicios Sociales, de conformidad con el artículo 3.a) del Decreto 37/1987, de 28 de mayo, por el que se regula el Consejo Regional de Servicios Sociales.
- Informe jurídico del Servicio Jurídico del IMAS (art. 9 Decreto 33/2003, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica del Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia).
- Informe jurídico de la Vicesecretaría de la Consejería (art. 53 Ley 6/2004, de 28 de diciembre) con carácter preceptivo.





7.- Informe de impacto presupuestario: al tratarse de una norma que se limita a establecer un régimen jurídico básico de concesión de ayudas, carece de impacto presupuestario.

Repercusión presupuestaria: no implica por sí misma gasto o ingreso en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2020.

En recursos de personal: ninguno

En recursos materiales: ninguno

8.- Informe de impacto por razón de género: debe valorarse como favorable, pues si bien no tiene una incidencia directa en la perspectiva de género, los beneficiarios últimos de las ayudas objeto de la norma son las personas trabajadoras en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo, incluyendo tanto a hombres como a mujeres, sin que exista ningún tipo de distinción.

B) CONTENIDO

I. OPORTUNIDAD Y MOTIVACIÓN TÉCNICA

La Organización Mundial de la Salud (OMS), con fecha 11 de marzo de 2020, calificó como pandemia internacional la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el virus Covid-19, comúnmente conocido como Coronavirus, debido a su rápida propagación a nivel mundial.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma, en el territorio nacional, para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El artículo 9 de dicha norma estableció la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados.

La Orden conjunta de las Consejerías de Salud, de Educación y Cultura y de Empleo, Investigación y Universidades, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas adicionales en relación con la pandemia global de Coronavirus (COVID-19), dispuso la suspensión temporal de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza incluidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en la Comunidad Autónoma de Región de Murcia a partir del día 16 de marzo de 2020.

Al mismo tiempo, durante el transcurso de la situación de emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus (COVID-19), y en base a las directrices y recomendaciones de los expertos en la materia, por parte del Instituto Murciano de Acción social (IMAS) se fue acordando de forma paulatina durante el transcurso de la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19 el cierre de centros para personas mayores en situación de dependencia, y de centros de día de servicios sociales, así como de centros de atención a personas con discapacidad, lo que incluye no solo los recursos para mayores,





sino también los recursos destinados a personas en situación de discapacidad o dependencia.

La excepcional situación sobrevenida a raíz de la suspensión de la actividad educativa presencial, prolongada hasta la finalización del curso escolar 2019-2020, así como del cierre de los citados centros de atención a personas mayores y en situación de dependencia o discapacidad, ha obligado a un gran número de personas trabajadoras a adaptar su jornada de trabajo o situación laboral, con el fin de poder compatibilizarla con la debida atención y cuidado de que precisaban sus hijos e hijas, así como otros familiares mayores y en situación de dependencia que se encontraban a su cargo.

Del mismo modo, la asistencia, atención y cuidado de un familiar contagiado o en aislamiento preventivo por COVID-19 puede haber dado lugar a análogas situaciones de dificultad para la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral, situaciones que muchas personas trabajadoras se han visto también abocadas a solventar acogiéndose a una excedencia o reducción de jornada.

De otro lado, no puede obviarse que las medidas de contención derivadas de la declaración del estado de alarma en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración y otras vinculadas al sector servicios han tenido un impacto negativo sobre el empleo, por cuanto las empresas que pertenecen a dichos ámbitos sectoriales de actividad han tenido que acudir a mecanismo de ajuste temporal de su actividad (EREs o ERTes), lo que ha provocado la reducción temporal de la jornada de trabajo de muchas personas trabajadoras, o, en el peor de los casos, la suspensión temporal de los contratos, implicando, en la mayoría de ocasiones, mermas salariales que se adicionarían a las que conlleva intrínsecamente el ejercicio de estos derechos de conciliación por su carácter no retribuido.

Se ha hecho patente por tanto, para la Administración regional y los Agentes Sociales, la necesidad de paliar esta situación, por lo que, dando cumplimiento a lo acordado en el Pacto del Diálogo Social para la reactivación económica y social de la Región de Murcia, suscrito el 16 de mayo de 2020, se pretende ofrecer ~~ofreciendo~~ ayudas económicas para compensar la reducción de retribuciones que sufren aquellas personas trabajadoras por cuenta ajena que se han visto obligadas ante la crisis sanitaria generada por el COVID-19 a solicitar una excedencia laboral o reducción de jornada para el cuidado de hijos o hijas o de un familiar.

A tal efecto resulta preciso establecer las correspondientes bases reguladoras a través de la oportuna Orden de la titular del departamento competente, toda vez que respecto de las mismas ha de predicarse la naturaleza de subvenciones impropias o prestaciones económicas cuya gestión viene atribuida a la Consejería competente en materia de servicios sociales.

En efecto, sobre la naturaleza de las ayudas se ha pronunciado el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) en su Dictamen 189/2006, recaído en el Anteproyecto de la Ley de Renta Básica, señalando en relación con las ayudas sociales que "una entrega de fondos públicos sin contraprestación directa, y que tenga una finalidad pública, no es encajable en el concepto de subvención del artículo 2.1 de la Ley 38/2003 si carece de la afectación al cumplimiento de un determinado objetivo que se impone al beneficiario a modo de carga. Para este otro género de actividad administrativa se ha predicado por la doctrina el concepto de ayudas o también el de "subvenciones impropias", en las que la finalidad no es el fomento, sino la tutela social de situaciones de necesidad. Son ayudas vinculadas al status de los beneficiarios, sin perseguir a través de su otorgamiento ninguna actuación específica de éstos, ni estar fundado su otorgamiento en la previa realización de una actividad determinada".





II. MOTIVACIÓN Y ANÁLISIS JURÍDICO

1.- Competencia de la CARM sobre la materia.

El artículo 10.Uno.18 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de asistencia y bienestar social; desarrollo comunitario, política infantil y de la tercera edad; instituciones de protección y tutela de menores, respetando en todo caso la legislación civil, penal y penitenciaria; promoción e integración de los discapacitados, emigrantes y demás grupos sociales necesitados de especial protección, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación.

El artículo 22.b) de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia establece que “corresponde a la Consejería competente en materia de servicios sociales la elaboración de anteproyectos y proyectos de disposiciones de carácter general y de cualquier otra normativa específica en materia de servicios sociales”.

De conformidad con lo anterior, así como con lo previsto en el artículo 22.j de la Ley 3/2003, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, según el cual corresponde a la Consejería competente en materia de servicios sociales la gestión de convenios, subvenciones y prestaciones económicas de carácter individual o familiar, periódicas o no periódicas, resulta procedente la aprobación de las bases reguladoras de estas ayudas mediante Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de acuerdo con las competencias que le confiere el Decreto que Decreto de la Presidencia n.º 44/2019, de 3 de septiembre, por el que modifica el Decreto n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional.

Por otra parte, el artículo 2 de la Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación del Instituto Murciano de Acción social (IMAS) dispone que este organismo se constituye con la finalidad de ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales, de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios sociales de la Región de Murcia. Por su parte el artículo 3.1 de la misma Ley señala que este organismo desempeñará las funciones que se determinen en sus estatutos, correspondiéndole en particular la gestión de prestaciones económicas y de ayudas públicas a personas e instituciones públicas o privadas, contempladas en la vigente legislación de servicios sociales. De ahí que, considerando la naturaleza jurídica de las ayudas objeto de la presente orden como ayudas sociales, su tramitación y concesión corresponda al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), de acuerdo con lo dispuesto tanto en la norma de creación de dicho organismo autónomo como en sus Estatutos.

2.- Base jurídica y rango del proyecto normativo.

El artículo 22.b) de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, establece que le corresponde a la Consejería competente en materia de Servicios Sociales la elaboración de anteproyectos y proyectos de disposiciones de carácter general y de cualquier otra normativa específica en materia de servicios sociales.





Por otro lado, el artículo 52 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, establece que *“La titularidad de la potestad reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno, en materias no reservadas por el Estatuto de Autonomía a la competencia legislativa de la Asamblea Regional. No obstante, los consejeros podrán hacer uso de esta potestad cuando les esté específicamente atribuida por disposición de rango legal o en materias de ámbito organizativo interno de su departamento, sin que la misma pueda ser objeto de delegación, en ningún caso”*. A este respecto tenemos que tener en cuenta la Disposición Final Primera de la Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la CARM, que en su apartado 2 establece que *“Se atribuye al titular de la consejería competente en materia de asistencia y bienestar social, el ejercicio de la potestad reglamentariamente para el establecimiento mediante Orden de las normas reguladoras de la concesión de las ayudas de carácter social concedidas por el IMAS”*.

El artículo 25.4 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de organización y régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece que adoptarán la forma de Orden de los Consejeros, las disposiciones y resoluciones de los mismos en el ejercicio de sus competencias.

3.- Breve descripción del contenido y de la tramitación de la propuesta normativa

En cuanto a la **estructura** de la norma, el proyecto de orden de normas reguladoras consta de quince artículos y una disposición final:

- Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
- Artículo 2. Situaciones objeto de ayuda
- Artículo 3. Pluralidad de beneficiarios.
- Artículo 4. Ámbito temporal de aplicación.
- Artículo 5. Requisitos comunes de las personas beneficiarias.
- Artículo 6. Requisitos específicos de las personas beneficiarias..
- Artículo 7. Cuantía de las ayudas.
- Artículo 8. Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
- Artículo 9. Instrucción del Procedimiento.
- Artículo 10. Comisión de Valoración.
- Artículo 11. Resolución.
- Artículo 12. Notificación de las Resoluciones.
- Artículo 13. Recursos.
- Artículo 14. Pago de las Ayudas.
- Artículo 15. Obligación de las personas beneficiarias.
- Artículo 16. Devolución de la Ayudas.
- Artículo 17. Alteración de las condiciones.
- Artículo 18. Régimen de compatibilidades.
- Disposición final primera.
- Disposición final segunda. Entrada en vigor.

En cuanto al **contenido** de las normas reguladoras propuestas, cabe señalar que

Las situaciones objeto de estas ayudas, según su artículo 2, son:





a) Excedencia, permisos o licencias sin sueldo para atender al cuidado de hijo o hija, cónyuge o pareja de hecho o familiar hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, dependiente o discapacitado.

b) Reducción de la jornada de trabajo en, al menos una hora diaria de la jornada laboral completa o el tiempo proporcional cuando la jornada sea menor, para atender el cuidado de hijo o hija, cónyuge o pareja de hecho o a un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, dependiente o discapacitado.

De acuerdo con el artículo 4 del proyecto normativo esta Orden tiene un ámbito temporal concreto. Así, las ayudas previstas en la presente orden serán de aplicación a aquellas excedencias y reducciones de jornada de trabajo que supongan una reducción efectiva en la remuneración de las personas trabajadoras acogidas a las mismas en el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 hasta la fecha de certificación de la excedencia. Asimismo serán de aplicación a las reducciones de la jornada de trabajo y a las excedencias que ya vinieran disfrutándose con anterioridad a esa fecha, y que a partir de la misma hayan sido adaptadas por la persona trabajadora para asumir, de forma personal y directa, los deberes de asistencia atención y cuidado respecto de cualquiera de las personas relacionadas en el artículo anterior. En cualquier caso, sólo se tendrá en cuenta a efectos de la concesión de la ayuda aquellas modificaciones o ampliaciones que se hayan producido a partir del 14 de marzo de 2020.

Se establecen para los beneficiarios de las ayudas, recogidos en su artículo 3, unos requisitos comunes (artículo 5) y unos específicos (artículo 6).

La gestión de las ayudas correrá a cargo del Instituto Murciano de Acción social, a través del Servicio de Prestaciones Económicas de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión (art. 9), estableciendo el artículo 7 la cuantía máxima de las ayudas así como las reglas para el cálculo de la renta per cápita de la unidad familiar.

Continúan los siguientes artículos de la Orden estableciendo la forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes (art. 8); la instrucción del procedimiento (art. 9); la resolución, plazos y notificación (art. 11 y 12); obligaciones de las personas beneficiarias (art. 13); la devolución de las ayudas (art. 16); la alteración de las condiciones (art. 17), y la concurrencia con otras ayudas o subvenciones públicas (art. 18).

En cuanto a la **tramitación**, se han seguido los trámites previstos para el ejercicio de la potestad reglamentaria en el artículo 53 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno en la Región de Murcia.

Respecto de dicha tramitación, debemos de tener en cuenta que concurren razones graves de interés público derivadas de la necesidad de dar una urgente respuesta a las personas trabajadoras en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas o familiares que, como consecuencia de la crisis sanitaria, económica y social que ha motivado la COVID-19, han visto en los últimos meses agravada o empeorada sustancialmente su situación, encontrándose en unas circunstancias que requieren de un apoyo inmediato por las Administraciones Publicas de modo que puedan cubrir sus necesidades más básicas e irrenunciables. Por todo ello se considera que en la tramitación de este proyecto de norma propuesta debe realizarse con la mayor celeridad, evacuándose los correspondientes informes preceptivos en el menor plazo posible.





Asimismo, en cuanto a los trámites de consulta pública y trámite de audiencia, el artículo 133¹ de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas cuando concurren razones graves de interés público que lo justifiquen. Asimismo, el artículo 53.3.e) de la citada Ley 6/2004, de 28 de diciembre, establece con respecto al trámite de audiencia, sin que el mismo regule el trámite de consulta pública, la posibilidad de que se excluya el mismo por graves razones de interés público, acreditadas expresamente en el expediente. A la vista de lo expuesto en el párrafo precedente, consideramos que en la presente tramitación concurren graves razones de interés público que aconsejan la no realización de la consulta pública previa y del trámite de audiencia en la tramitación del proyecto de norma propuesto.

Debe señalarse no obstante que la elaboración de la norma propuesta se ha de sometido a la consulta de las entidades representativas de los beneficiarios directos de la norma a través de la convocatoria del Consejo Asesor Regional de Personas Mayores, de Personas con Discapacidad, de Infancia y Familia y del Consejo Asesor Regional de Servicios Sociales. A tal efecto se ha tenido en cuenta que se configura según Decreto núm. 37/1987, de 28 de mayo, como órgano colegiado consultivo constituido con la finalidad de garantizar la participación de los distintos sectores sociales e institucionales en la planificación elaboración de normativa y organización de los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

A la fecha de la presente Memoria, se han de recabar los siguientes informes o dictámenes:

- Informe jurídico del Servicio Jurídico del IMAS (art. 9 Decreto 33/2003, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica del Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia).
- Informe jurídico de la Vicesecretaría de la Consejería (art. 53 Ley 6/2004, de 28 de diciembre) con carácter preceptivo.

4.- Listado de las normas cuya vigencia quede afectada por la norma que se pretende aprobar

Ninguna norma resulta afectada por las normas reguladoras objeto de esta MAIN.

5.- Necesidad de alta o actualización del servicio o procedimiento previsto en la disposición que se pretende aprobar en la Guía de Procedimientos y Servicios de la Administración Pública de la Región de Murcia.

Dado que la presente orden regula las normas reguladoras para la adjudicación por primera vez de una línea de ayudas cuya gestión se atribuye a la Comunidad Autónoma, será preciso la inclusión del procedimiento de adjudicación y justificación de las mismas en la Guía de Procedimientos y Servicios de la Administración Pública de la Región de Murcia.

¹ Declarado contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) y c) de la Sentencia TC (Pleno) 55/2018 de 24 de mayo («B.O.E.» 22 junio), salvo el inciso de su apartado 1 "Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública" y el primer párrafo de su apartado 4.





IV. INFORME DE IMPACTO PRESUPUESTARIO

Debe señalarse que el proyecto de Orden de bases que nos ocupa no lleva consigo impacto presupuestario alguno, toda vez que se limita a establecer los aspectos esenciales del régimen jurídico básico relativo a la concesión de las ayudas objeto de regulación, debiendo diferirse la evaluación del impacto presupuestario al momento en que se lleve a cabo la correspondiente convocatoria.

V. INFORME DE IMPACTO POR RAZON DE GÉNERO

La Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y de Protección contra la Violencia de Género de la región de Murcia, introduce la obligatoriedad de que los proyectos de disposiciones de carácter general vayan acompañados de un informe sobre el impacto en función del género de las medidas que en ellos se establezcan.

Con carácter general, se puede señalar que por el objeto propio de la Orden que se pretende aprobar, ésta no tiene una incidencia directa en la perspectiva de género, por cuanto los beneficiarios últimos de las ayudas objeto de la misma son las personas trabajadoras en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas o familiares, incluyendo tanto a hombres como a mujeres, sin que exista ningún tipo de distinción.

En este sentido, ha de tenerse en cuenta que, de conformidad con la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el porcentaje de mujeres que se encuentran en un nivel de renta inferior a los 18.600,80 euros (ligeramente inferior a tres veces el IPREM) es significativamente mayor al de los hombres. En concreto, el 70,7% de las mujeres se encuentran en esta situación frente al 69,3% que representan los hombres, es decir, una diferencia de más de un punto porcentual. Asimismo, se observa que esas diferencias se acentúan para rentas inferiores. En supuesto de personas con renta inferior a 15.869,00 euros, en el caso de los hombres representan el 59,1%, mientras que en el caso de las mujeres representan el 60,9%, lo que supone una brecha en términos de renta próxima a dos puntos porcentuales.

Por ello, al ser un hecho contrastado que las mujeres disponen de unos niveles medios de renta inferiores a los de los hombres, cabe deducir que aquéllas resultarán preferentemente beneficiadas de la puesta en marcha de estas ayudas, por lo que Hemos de concluir por lo tanto que el impacto por razón de género de las medidas propuestas en la norma se ha de valorar como POSITIVO en relación con la igualdad de hombres y mujeres.

VI. OTROS IMPACTOS

Debe valorarse que el texto remitido tiene un impacto FAVORABLE en la familia, la infancia y la adolescencia, en la medida en que las ayudas reguladas por la orden objeto de la presente MAIN repercutirán positivamente en el bienestar material y emocional, socialización, motivación y autodeterminación tanto de familias en su conjunto, como en particular de los niños y adolescentes de aquellos colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social a los que dichos programas van dirigidos.





En la propuesta normativa son objeto de especial consideración las familias cuyos hijos e hijas tengan reconocido un grado de discapacidad de al menos un 33 por ciento. Todo lo anterior permite evaluar como FAVORABLE el impacto de la norma proyectada respecto del colectivo de las personas con discapacidad.

No existen otros impactos significativos en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Esta norma no afecta al acceso a actividades económicas en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional, por lo que no entra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

Murcia, firmado y fechado al margen
La Subdirectora General de Pensiones, Valoración y
Programas de Inclusión
María Reyes Sánchez Gómez

30/10/2020 14:51:47

SANCHEZ GOMEZ MARIA DE LOS REYES

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-17405ubb-1ab7-eede-3d23-0050569b34e7

